



**JUZGADO PRIMERO LABORAL MUNICIPAL
DE PEQUEÑAS CAUSAS DE CÚCUTA**

El auto anterior se notificó por anotación en ESTADO No.
005 del 22 de ENERO DE 2024 a las 8:00 a.m., y se desfija
el mismo día siendo las 6:00 p.m.

JORGE LEONARDO GAUTA BURGOS
Secretario



**Departamento Norte de Santander
Distrito Judicial de Cúcuta**

JUZGADO PRIMERO LABORAL MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS DE CÚCUTA

Radicado: 54-001-41-05-001-2023-00563-00
Clase de proceso: EJECUTIVO
Demandante: ANGELICA DEL PILAR OÑATE PACHECO
Demandado: EJERXA SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.

San José de Cúcuta, diecinueve (19) de enero del año dos mil veinticuatro (2024)

Procede el Despacho a resolver el recurso de REPOSICIÓN propuesto por el apoderado de la parte demandante contra el auto proferido el 10 de octubre de 2023 (archivo 008) mediante el cual se abstuvo el juzgado de librar orden de apremio, atendiendo que no se acreditaron los requisitos del título ejecutivo, por no existir certeza de que el suscriptor de la obligación estuviese debidamente autorizado por el representante legal de la sociedad para tales menesteres.

Como argumento de su ataque, el demandante afirma que se debió presumir la buena fe constitucional en cuanto a que el firmante del título base de recaudo se encontraba debidamente autorizado por la sociedad EJERXA SERVICIOS INTEGRALES S.A.S., y por ende librar el mandamiento de pago deprecado, señalando que el demandado en el ejercicio de su derecho de contradicción cuenta con la oportunidad para realizar las manifestaciones que considere.

En Colombia, la buena fe se entiende como un principio jurídico fundamental consagrado en la Constitución Política *artículo 83, Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas*, así como en la codificación especial comercial y civil, principio que en ninguna manera este despacho desconoce frente al actuar de la parte demandante.

Es de resaltar que el caso bajo estudio se centra en la solicitud de ejecución de un documento transaccional surgido dentro de la relación laboral, por lo que resulta necesario auscultarlo de conformidad con lo normado en el artículo 100 del C.P.T. y de la S.S., y ante la falta disposición especial frente a los aspectos formales y sustanciales del título base de recaudo, por aplicación analógica del artículo 145 de la norma ibidem, debemos acudir a la legislación general, civil o comercial.

Bajo la luz de lo anterior, cuando se trate de sociedades, es necesario traer a colación la codificación especial civil, en lo atiente a que las personas jurídicas requieren siempre en sus relaciones externas de alguien que lo represente para manifestar la voluntad de esta (artículo 639 C. Civil), en tal sentido, en el caso de las sociedades y dependiendo del tipo societario, la representación legal se encuentra en cabeza de algunas personas como el presidente, los gerentes, socios gestores, etc., cuyas facultades y limitaciones se encuentran en el estatuto societario social y en la ley.

Por ende, cuando se trata de la suscripción de títulos valores u obligaciones en nombre de la persona jurídica, la norma especial comercial contempla que se reputará como facultado para ello por el solo hecho de su nombramiento, el representante legal de la sociedad (artículo 641 del C. Co.), y en el evento que el suscriptor del documento obligante obre como representante, mandatario u otra calidad similar, deberá acreditar tal condición (artículo 640 C. Co.).

Rememórese, que el artículo 100 del C.P. del T. dispone que será exigible ejecutivamente la obligación surgida de una relación de trabajo que conste en acto o documento **que provenga del deudor** o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme, por su parte, el artículo 422 del C.G.P., aplicable por analogía expresa del artículo 145 del C.P. del T., impone que esta obligación sea **clara, expresa y exigible, que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley.**

De acuerdo con las anteriores disposiciones, los representantes legales de las sociedades, se reputarán autorizados para adquirir obligaciones en nombre de la persona jurídica, por el solo hecho de su nombramiento, y quien manifieste actuar en representación de este o como mandatario, así deberá acreditarlo, ello con la finalidad de que el documento adquiera la condición de título ejecutivo al reunir el requisito de expresividad que *“consiste en que el documento que la contenga registre certeza, nitidez, que sea inequívoca del crédito a favor del acreedor y de la deuda en contra del deudor”*¹, así como los de claridad, y exigibilidad previstos en la norma, no permitiendo al fallador suplir los mismos con razonamientos, interpretaciones o alcances que no son explícitos, ni tampoco recurrir al recaudo de la evidencia ante la falta de pruebas.

Es por ello, que el despacho no puede obviar que en el título base de recaudo aportado dentro del presente proceso ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE CONTRATO LABORAL (archivo digital 003, fls. 1-2), quien lo suscribe como parte obligada de la negociación, es la señora ANGELICA MARÍA LOZANO, quien dice actuar en calidad de autorizada por el representante legal de EJERXA SERVICIOS INTEGRALES S.A.S., sin embargo al contrastarlo con el certificado de existencia y representación legal de la sociedad en comento (archivo digital 004, fls. 3-10), allí no se registra tal autorización y tampoco se acredita mandato en tal sentido conforme lo dispone el ya dicho artículo 640 del Código de Comercio.

Por lo referido, sin más elucubraciones se puede concluir que el documento arrimado al despacho no reúne los requisitos normativos para denominarse título ejecutivo, pues reitérese, no existe certeza, ni nitidez en lo atinente a que la obligación provenga de la sociedad EJERXA SERVICIOS INTEGRALES S.A.S., pues el mismo no se encuentra suscrito por su representante legal y quien afirma estar autorizado para rubricarlo, no acredita tal calidad, y como quiera que cuando se trata de títulos ejecutivos, para que el fallador libre orden de apremio, las condiciones formales de estos *-claro, expreso y exigible-*, deben encontrarse satisfechas de manera límpida y notoria, sin acudir a interpretaciones o razonamientos no contemplados en la norma y mucho menos considerar que el cumplimiento de dichos requisito se dan por satisfechos en aplicación a la presunción de buena fe.

Ahora bien, frente a la manifestación realizada por el recurrente, en el sentido de que el juez debe librar mandamiento de pago, y es el demandado el llamado a defenderse en el evento de no estar satisfecho con la orden de apremio, resulta pertinente indicar que el Juez tiene dentro de sus deberes, escrutar los presupuestos del título ejecutivo, de manera preliminar al momento de emitirse la orden de apremio, pues es este, el título ejecutivo el elemento esencial del proceso ejecutivo Artículo 422 CGP.

¹ STC20214-2017 del 30 de noviembre de 2017 de la Sala de Casación Civil

Téngase en cuenta que, dentro del proceso ejecutivo, la primera providencia de fondo que profiere el juez de conocimiento es el mandamiento de pago y constituye la orden judicial de cumplimiento de la obligación demandada, en los **procesos ejecutivos** no se busca la declaración del derecho pues dicho derecho ya está contenido en un título valor o en cualquier documento que preste merito **ejecutivo**. El proceso ejecutivo busca es la ejecución del deudor que incumplió una obligación, la cual debe estar contenida en un documento que reúna los requisitos establecidos por el legislador, a diferencia de los **procesos ordinarios** donde la pretensión es discutible.

En este orden de ideas, no se repondrá el auto motivo de censura.

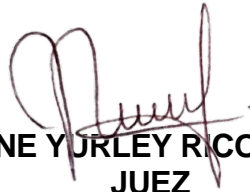
En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO PRIMERO LABORAL MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS DE CÚCUTA**,

RESUELVE:

PRIMERO: NO REPONER el auto proferido el diez (10) de octubre de dos mil veintitrés (2023), por lo señalado previamente.

SEGUNDO: Contra esta decisión no procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



KARINE YURLEY RICO JAIMES
JUEZ